



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dos (02) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

DEMANDANTE	OSCAR DARÍO OCHOA NAVARRO
DEMANDADOS	NORIA S.A. (en liquidación judicial), ARNULFO GABRIEL MÁRQUEZ CARRILLO (en liquidación judicial) Y EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA (VIVA)
LLAMAMIENTO EN GARANTÍA	ASEGURADORA CONFIANZA - CONSORCIO EDUCATIVO YALI
TIPO DE PROCESO	Ordinario
RADICADO NACIONAL	05001310502120190022601
INTERNO	420-23
ASUNTO	Excepciones previas de falta de integración del litisconsorcio necesario, prescripción e ineptitud de la demanda.
DECISIÓN	Confirma

La Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022, dentro del proceso ordinario laboral promovido por OSCAR DARÍO OCHOA NAVARRO contra NORIA S.A.S., ARNULFO GABRIEL MÁRQUEZ CARRILLO Y EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA (VIVA), procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto frente a la decisión adoptada por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín el 22 de septiembre de 202, mediante la cual declaró no probadas las excepciones de falta de integración del litisconsorcio necesario, falta de competencia, prescripción e ineptitud de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda¹

El señor Oscar Darío Ochoa Navarro formuló demanda ordinaria laboral contra Noria S.A.S, Arnulfo Gabriel Márquez Carrillo y Empresa de vivienda de Antioquia (VIVA); pretendiendo que se declare **i)** la existencia de un contrato verbal de obra o labor suscrito por él con las demandadas, desde el 13 de enero de 2016 hasta el 19 de marzo de 2016; **ii)** la terminación unilateral y sin justa causa, del contrato

¹ 01PrimerInstancia; 01Demanda

de trabajo por parte de los demandados; **iii)** la solidaridad en el pago de acreencias laborales, por parte de la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA; **iv)** las demandadas están llamadas a responder por las obligaciones y condenas que el despacho declare e imponga; **v)** que tiene derecho al pago de 10 horas extras diurnas adeudadas desde el 12 de marzo 2016 hasta el 19 de marzo de 2016; **vi)** al pago de los subsidios familiares por sus 2 hijos menores de edad; **vii)** la dotación durante el tiempo laborado; **viii)** el auxilio de transporte dejado de pagar; **ix)** las cesantías proporcionales y los correspondientes intereses a las cesantías; **x)** la prima de servicios proporcional; **xi)** las vacaciones; **xii)** la indemnización por despido sin justa causa desde el 19 de marzo de 2016 hasta el día de la entrega del parque educativo, esto es el 21 de febrero del 2019; **xiii)** la indemnización del artículo 65 del CST a partir del 08 de abril de 2016; **xiv)** al pago de los anteriores conceptos; **xv)** indexación de las condenas; **xvi)** costas y agencias en derecho; y **xvii)** lo extra y ultra petita.

La demanda fue admitida mediante auto del 30 de abril de 2019², ordenándose la notificación a las demandadas.

Excepciones previas propuestas:

Empresa de Vivienda de Antioquia³: al contestar propuso como excepciones previas las que denominó:

- **No comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios:** Indicó que suscribió contrato de mandato sin representación con el Departamento, el cual tiene tenía por objeto entregarle la ejecución de proyectos estratégicos de la Secretaría de Educación Departamental, mandato en virtud del cual -luego de la licitación pública N° 2014-PE-LP-033-, realizó la adjudicación de la obra al señor Arnulfo Gabriel Márquez Carrillo, considerando por ello que el **verdadero beneficiario de la obra** es el **Departamento de Antioquia** a quien debe citarse a integrar el contradictorio por pasiva.

Igualmente presenta **llamamiento en garantía** contra la compañía de Seguros Confianza S.A. y el Consorcio Educativo Yali, conformado por las sociedades Rio Arquitectura e ingeniería S.A. y Orbe Consultoría en Arquitectura e ingeniería S.A., mismo que fue **admitido** por el A quo mediante auto del 25 de septiembre de 2019⁴.

Arnulfo Gabriel Márquez Carrillo⁵ al contestar formuló como previa la excepción de:

² 01PrimerInstancia; 03Admite.

³ 01PrimerInstancia; 05ContestacionViva.

⁴ 01PrimerInstancia; 08AdmiteContestacionVIVAAdmiteLlamamiento

⁵ 01PrimerInstancia; 09ContestacionArnulfoGabriel.

- **Falta de jurisdicción⁶:** informó que desde julio de 2017 se encontraba admitido en **proceso de reorganización de persona natural comercialmente**, deviniendo por tanto imposibilidad de continuar con la demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra él, siendo el competente el juez del concurso, es decir la Superintendencia de Sociedades.
- **Competencia:** considerando que, en virtud del proceso de reorganización, la competencia para conocer del proceso, radica en la Superintendencia de Sociedades.

También presentó **llamamiento en garantía⁷** contra la **Aseguradora Confianza** el cual fue **admitido** mediante auto del 08 de octubre de 2019⁸

Arca Arquitectura e Ingeniería S.A., antes Rio Arquitectura e ingeniería S.A. y Orbe Consultoría en Arquitectura e ingeniería S.A. -Consorcio Educativo Yali-⁹ Formularon como excepciones previas:

- **Prescripción:** sostuvo que al ser claro que el demandante laboró desde el 15 de enero de 2016, hasta el 19 de marzo de 2016, los derechos laborales del actor se encuentran prescritos conforme al artículo 151 del CPTSS, configurándose la excepción previa de prescripción.
- **Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales¹⁰:** Indicó que la demanda no cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 25 del CSTSS, al no haber identificado plenamente el domicilio del demandante, además de que los hechos esbozados en la demanda hacen referencia a citas de documentos contractuales o de nombramiento y por tanto no sustentan las pretensiones de la demanda.

Las demás demandadas y llamada en garantía no propusieron excepciones previas.

Decisión objeto de recurso

El 22 de septiembre de 2023 en la audiencia regulada en el artículo 77 del CPTSS¹¹, **el juez de instancia desestimó las excepciones de falta de integración del litisconsorcio necesario, falta de competencia, prescripción e ineptitud de la demanda**, y condenó a las demandas que propusieron las excepciones fijando agencias en derecho en la suma de \$200.000. Fundamenta su decisión así:

⁶ 01PrimeralInstancia; 11ExcepcionPrevialArnulfo.

⁷ 01PrimeralInstancia; 12LlamamientoGarantiaArnulfo-Confianza.

⁸ 01PrimeralInstancia; 13AdmiteContestacionArnulfoAdmiteLlamamiento

⁹ 01PrimeralInstancia; 19ContestacionConsorcioEducativoYali

¹⁰ 01PrimeralInstancia; 19ContestacionConsorcioEducativoYali. pag.17/18

¹¹ 01PrimeralInstancia; 34AudienciaPrimera

Falta de integración del litisconsorcio necesario por pasiva: estimo que no existía disposición legal que obligue a resolver de forma uniforme tanto para VIVA como para el Departamento de Antioquia, además de que sin la presencia del ente territorial sería posible resolver de fondo, resultando que a lo sumo el Departamento de Antioquia sería un litisconsorte facultativo cuya vinculación es potestativa del demandante quién no lo llamó al proceso.

Falta de competencia: la denegó en tanto se trata de un proceso ordinario que escapa de la competencia del ente que adelanta el proceso de liquidación judicial o reorganización quien asume la competencia, pero de los procesos ejecutivos, no siendo éste uno de dicha naturaleza.

Prescripción¹²: no es posible declarar la prescripción como excepción previa, según lo dispuesto en el artículo 32 del CPTSS, que exige plena certeza acerca de las fechas de exigibilidad del derecho o su suspensión, respecto de las cuales no existe tal certeza.

Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales¹³: considerando ciertas las manifestaciones de la apoderada, denegó la prosperidad de las excepciones en tanto la jurisprudencia ha ordenado a los jueces interpretar la demanda y en caso de no ser posible, proceder a su rechazo por circunstancias que pueden ser subsanadas en cualquier tiempo.

Recurso de apelación

Inconformes con lo decidido, los apoderados de **Empresa de Vivienda de Antioquia y Consorcio Educativo Yalí**, formularon recurso de alzada en torno a la denegación de la prosperidad de las excepciones previas propuestas.

Empresa de vivienda de Antioquia¹⁴: Sostuvo que la vinculación del Departamento de Antioquia era necesaria, en tanto la decisión que se tome dentro del proceso puede afectarle, de acuerdo con precedente del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia, en sentencia del 01 de febrero 2021 M.P. Nancy Edid Bernal Millán Rad. 05154311213001201600578 (sic) en el cual se determinó que el verdaderamente solidario en las obligaciones era el Departamento de Antioquia, precedente en el cual se absolvió a VIVA de pretensiones similares a las discutidas en este proceso; así mismo solicitó se revoque la condena en costas al interponerse la excepción previa como ejercicio del derecho de defensa de una entidad pública. Insiste que realmente el beneficiario de la obra es el Departamento de Antioquia, porque el contrato de mandato se realizó para cumplir una actividad propia de su plan de desarrollo.

¹² 01PrimeraInstancia; 35AudienciaPrimeraApelacion

¹³ 01PrimeraInstancia; 35AudienciaPrimeraApelacion

¹⁴ 01PrimeraInstancia; 34AudienciaPrimera

Consorcio Educativo Yalí¹⁵: indicó que para que se dé la interrupción de la prescripción se debió haber notificado de la reclamación realizada por los trabajadores al empleador y no a un tercero, razón por la cual no se puede predicar la interrupción de la prescripción; en cuanto a la ineptitud de la demanda señaló que con el libelo introductorio no era posible verificar la identidad del accionante o su intención de ejercer su derecho de acción. Por tales razones no procede la condena en costas.

El A quo no repuso la decisión adoptada y en su lugar concedió los recursos de apelación.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Una vez concedido el traslado a las partes para alegar de conclusión en esta sede, se recorrió de forma oportuna por la Empresa de Vivienda de Antioquia de la siguiente manera:

Empresa de vivienda de Antioquia¹⁶, Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de alzada, indicando que el Departamento de Antioquia tiene un interés legítimo en el resultado del proceso por ser dueño de la obra, además de que ella no tiene por objeto social la actividad de construcción.

II. CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el Art. 57 de la Ley 2ª de 1984 y los Arts. 15 B-1, 65 N°3 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: *“el que decida sobre excepciones previas”*.

Según el alcance de las sustentaciones de los sendos recursos de apelación interpuestos, el problema jurídico a resolver en esta sede consiste en determinar i) si están o no llamadas a prosperar las excepciones previas de Falta de integración del litisconsorcio necesario por pasiva, prescripción e inepta demanda por falta de los requisitos formales; ii) si se encuentra o no ajustada a derecho la condena en costas impuesta a las recurrentes en primera instancia.

En relación con la primera de ellas, tenemos que el artículo 61 del Código General del Proceso ha consagrado la figura del litisconsorcio necesario e integración del contradictorio así:

“Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de

¹⁵ 01PrimeraInstancia; 35AudienciaPrimeraApelacion

¹⁶ 02SegundaInstancia; 02AlegatosViva2120190226.

manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término.

Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.

Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos.

Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio”.

De esta manera, resultan litisconsortes necesarios los responsables principales de las deudas laborales -los presuntos empleadores- en tanto se pretende definir la existencia de tales pasivos a cargo de estos. Por su parte, los eventuales deudores solidarios, solo están llamados a ser parte procesal en los procesos que tengan por objeto definir esa solidaridad.

Consecuentemente en el proceso en el que se pretende la declaratoria de existencia de una obligación laboral no deviene indispensable vincular a un posible deudor solidario, por cuanto el objeto del juicio es definir el contenido de las obligaciones de una relación jurídica de la que el eventual obligado solidario no es parte, y por lo mismo, no hay lugar a excepciones derivadas de la naturaleza de la obligación conducentes a impedir su existencia¹⁷.

Atendiendo estas reflexiones, y examinados los hechos y pretensiones de la demanda concluye la Sala que que en este caso no procede la integración del contradictorio con el Departamento de Antioquia, como quiere que el accionante no demandó la solidaridad del ente territorial mencionado¹⁸; asistiéndole por tanto razón al A quo en la decisión adoptada en este aspecto.

¹⁷ Sala de Casación Laboral, Sentencia de 12 de septiembre de 2006, Radicado 25.323, reiterada en las Sentencias de 28 de abril de 2009, Radicado 29.522; del 03 de mayo de 2011, Radicado 38077;

¹⁸ Únicamente adujo tal calidad respecto de la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA (VIVA)

Respecto de la **excepción de prescripción** debemos remitirnos a lo regulado por el **artículo 32** del CPTSS, que señala:

*“ARTICULO 32. TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1149 de 2007. Ver artículo 15 sobre Régimen de Transición. El nuevo texto es siguiente:> El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. **También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión,** y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo.*

Las excepciones de mérito serán decididas en la sentencia.” (negritas y subrayas propias de la Sala)

La Corte Constitucional en sentencia **C-820 del 2 de noviembre de 2011** se pronunció sobre la exequibilidad de la anterior disposición, concluyendo en la viabilidad de proponer como previa la excepción de prescripción, advirtiendo que solamente podía tramitarse de tal manera cuando no hubiera “*discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión, de su interrupción, o de su suspensión*” ¹⁹.

Ahora, de acuerdo con lo previsto por el **Artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo**:

“(…) Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este Código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto (…).”

Y según lo dispuesto por el **artículo 151 del Código Procesal del Trabajo**:

“(…) PRESCRIPCIÓN. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva

¹⁹ “(…) Cabe precisar, que en lo que concierne a la excepción de prescripción, la ley laboral establece como condición para que pueda ser tramitada como previa el que no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión, de su interrupción, o de su suspensión.

18. La norma prevé igualmente la posibilidad de que el demandante presente pruebas respecto de las excepciones propuestas por el demandado como previas, las cuales se practicarán en la misma audiencia, en la cual, de acuerdo con la dinámica de la oralidad, se adoptará la determinación sobre las excepciones, incluidas las de cosa juzgada y prescripción, siempre y cuando, en este último evento, no existiere controversia acerca de la exigibilidad de la pretensión, o de la interrupción o suspensión”.

obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual (...).

Conforme a lo anterior, con acierto indicó el A quo que, no es procedente en el presente caso decidir como previa la excepción de prescripción en tanto la parte recurrente precisamente está discutiendo la efectividad de la reclamación elevada por el trabajador ante la Personería de Carolina del Príncipe –discute la interrupción de la prescripción-, lo cual requiere que en la sentencia de instancia el Juez emita pronunciamiento de fondo que resuelva tal controversia y lo conduzca a determinar si operó o no el fenómeno de la prescripción.

Finalmente, en lo que atañe a la **excepción de inepta demanda por falta de los requisitos formales** es necesario indicar que los contenidos en el artículo 25 del CPTSS no pueden mirarse, ni examinarse con un desmedido rigor, por cuanto el Juez tiene el deber de interpretar la demanda para extraer de ella su verdadera naturaleza e intención jurídica.

Si de la demanda, integralmente considerada, se puede deducir cuál es en concreto la aspiración del demandante, debe el juzgador, en uso de los amplios y extendidos poderes que –como director del proceso la ley procesal le confiere-, interpretarla racionalmente para desentrañar la pretensión, o para precisarla; tal y como hizo el A quo al estudiar su admisibilidad, razón por la cual resulta infundada la excepción previa propuesta, máxime cuando el objeto de los procesos es garantizar los derechos consagrados en las normas sustantivas, las cuales no se deben interpretar de manera aislada, ni rigorista, al extremo de constituir barreras infranqueables para acceder a una justicia pronta y oportuna.

Así lo ha indicado en múltiples ocasiones la H. Corte Constitucional, al recordad que *“Los jueces deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio garantizador de los derechos materiales dentro del marco de un debido proceso. En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de estas manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jurídico preestablecido se solucionen los conflictos de índole material. Sin embargo, si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho material (art. 228²⁰)²¹.”*

²⁰ ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley **y en ellas prevalecerá el derecho sustancial**. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.” (Negrilla propia).

²¹ T-1306-2001

Conforme a lo anterior, si bien la relación de hechos contenida en el libelo demandatorio resulta desafortunada, ello no era óbice para que el juez en cumplimiento de los mandatos legales y constitucionales procediera a estudiarla admitirla tal y como lo hizo y advirtiendo que las falencias formales no impidieron a las demandadas ejercer su derecho de contradicción y defensa, por tanto, la excepción previa propuesta tampoco estaba llamada a prosperar.

De esta manera, se **confirmará íntegramente** el Auto del 22 de septiembre de 2023 por medio del cual se declararon infundadas las excepciones previas propuestas por las demandadas.

III.COSTAS

Se confirma la condena en costas impuesta en primera instancia en tanto su imposición es objetiva conforme lo dispone el numeral 1° del artículo 365 del C.G.P.:

ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. *En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:*

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. (negrilla de la Sala)

De suerte que si bien es cierto como afirman las recurrentes, las excepciones fueron propuestas en el ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, sin que obraran de mala fe, también lo es que la imposición de tal condena deviene como consecuencia de la no prosperidad de las excepciones previas formuladas y no de la eventual temeridad o mala fe, para la cual el legislador previó sanciones diferentes, sin perjuicio de la condena en costas.

Con similar argumento se impone en esta instancia condena en costas a cargo de EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA Y CONSORCIO EDUCATIVO YALÍ, y en favor del demandante. Agencias en derecho en esta instancia en el equivalente a un (1) SMLMV en 2024 para cada una de ellas.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente la decisión proferida el 22 de septiembre de 2023 por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario de doble instancia promovido por OSCAR DARÍO OCHOA NAVARRO contra NORIA S.A.S., ARNULFO GABRIEL MÁRQUEZ CARRILLO Y EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA (VIVA), al cual se llamó en garantía a la ASEGURADORA CONFIANZA - CONSORCIO EDUCATIVO YALÍ; en cuanto desestimó las excepciones previas propuestas, por lo ya motivado.

SEGUNDO: Costas a cargo de EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA Y CONSORCIO EDUCATIVO YALÍ. Agencias en Derecho en el equivalente a un SMLMV en 2024, a cargo de cada una y en favor de la parte demandante. Las de primera instancia se confirman.

Notifíquese este proveído por Estados.

Se ordena notificar por estados.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS

<p>Certifico que el auto anterior fue notificado por ESTADOS N° 018 fijados hoy 05 de febrero de 2024 a las 8:00AM</p> <p>_____</p> <p>El secretario</p>
--